

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Licencia judicial

Radicado 2016-01085

En atención a que no hay pruebas pendientes por recaudar y que las obrantes al proceso resultan suficientes para emitir decisión de fondo sin que haya lugar a convocar a audiencia de que trata el art. 579 del C.G.P., por lo que procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda.

El objeto del presente proceso tiene como norte que por los trámites correspondientes se conceda licencia judicial a la señora **ANA MERCEDES ORTIZ VALENZUELA** en su calidad de madre y representante legal de **MÓNICA ACERO ORTIZ** para enajenar los derechos herenciales que posee en la sucesión de su padre **RICARDO ACERO VERA** que se tramita en el Juzgado 24 de Familia de esta ciudad.

Fundamenta la petición en lo pertinente para el caso, es la necesidad de la venta para poder adquirir una vivienda para la señora **MÓNICA ACERO ORTIZ**.

Una vez admitida la demanda, en providencia del 1 de septiembre de 2020 a más de la prueba documental allegada con el libelo introductorio, se recaudó la testimonial solicitada.

Cumplida la etapa probatoria se encuentra el proceso al Despacho para fallo a lo que se procede, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

No se advierte causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y descontados los presupuestos procesales, pues se encuentran reunidos a cabalidad, pasa sin tardanza el Despacho a decidir el fondo del asunto que le fuera puesto a su consideración.

Pretende la solicitante se le conceda licencia judicial para enajenar los derechos herenciales que posee MÓNICA ACERO ORTIZ en la calidad de heredera del señor RICARDO ACERO VERA, en el proceso de sucesión que se tramita en el Juzgado 24 de Familia de esta ciudad.

Es preciso señalar que en este estrado judicial se tramita un proceso de interdicción en favor de MÓNICA ACERO ORTIZ mediante el cual el en providencia del 24 de mayo de 2007 se le designó como curadora a la señora ANA MERCEDES ORTIZ VALENZUELA en su calidad de madre para que lo representara en todos sus actos.

Ahora bien, el 26 de agosto de 2019 el Congreso de la República aprobó la Ley 1996, *"[p]or medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad"*. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto en la Cámara de Representantes, su objetivo era reconocer el derecho a: *"la capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad, sin excepciones, y sin limitaciones, al ejercicio del mismo, con concordancia con el mandato del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad."*

Esto se ve reflejado en su artículo 1º, ya que determina que su objetivo es establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad, y el acceso a los apoyos que puedan requerir para ejercerla.

En consecuencia, el artículo 6º de esta normativa establece lo siguiente: **"ARTÍCULO 6º. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal**

en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.

PARÁGRAFO. *El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma.”*

Por lo tanto, las normas y las prácticas sociales siempre deben reconocer la capacidad legal de todas las personas con discapacidad, de manera que no es posible restringir el ejercicio de este derecho mediante ninguna figura jurídica.

En concordancia con este mandato, el artículo 8° de la ley 1996 de 2019 establece lo siguiente: **“ARTÍCULO 8°. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL.** *Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume.*

La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente.”

De esta forma, las personas con discapacidad tienen derecho a que se lleven a cabo los ajustes necesarios para que puedan realizar actos jurídicos sin ningún obstáculo.

Es importante señalar que esta ley establece que, si bien no es posible impedir a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones, estas pueden contar con un sistema de apoyos para formar su juicio. Al respecto el artículo 9° de la ley establece: ***“ARTÍCULO 9°. MECANISMOS PARA ESTABLECER APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con apoyos para la realización de los mismos.***

Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de dos mecanismos:

1. A través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que prestarán apoyo en la celebración del mismo;

2. A través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación judicial de apoyos.”

Así las cosas, los diversos mecanismos de apoyo tienen como objetivo que las personas con discapacidad y sus apoyos puedan generar un sistema de ayuda *“en la toma de decisiones que se ajusten a sus necesidades y preserven la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad, al tiempo que [garanticen] los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad legal.”^[1]*

No obstante, es importante señalar que, de conformidad con el artículo 52 de esta ley, las disposiciones que reglamentan la adjudicación judicial de apoyos contenidas en el Capítulo V de la normativa, entrarán en vigencia veinticuatro (24) meses después de la promulgación de la presente ley. Por lo tanto, actualmente no se encuentran vigentes.

Por otro lado, además de los distintos mecanismos de apoyo, el artículo 21 de la ley establece las directivas anticipadas, mediante las cuales una

persona mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de su voluntad y determinar sus preferencias en decisiones relativas a actos jurídicos con antelación a los mismos. De este modo, estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros hechos encaminados a tener efectos jurídicos.

El artículo 88 de la Ley 1306 de 2009 establece que el curador representará al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de ley. Las acciones civiles contra personas con discapacidad mental absoluta y menores deberán dirigirse contra el curador, para que lo represente en la litis. No será necesaria autorización del curador para proceder penalmente contra los pupilos, pero en todo caso el guardador deberá ser citado, para que suministre los auxilios que se requieran para la defensa.

El legislador con la anterior normatividad al precisar el término enajenar significa que el Guardador está autorizado para vender los bienes inmuebles de propiedad de su pupilo previa autorización expresa del Juez.

También es del caso traer a colación que, dentro de los deberes del Guardador General, no solamente está el de velar por la salud de su pupilo, sino que también tiene la obligación de intervenir en la protección de sus bienes como es la conservación y aumento de su precio en el transcurso del tiempo.

Cuando el Guardador General precisa la venta de un bien inmueble de su pupilo, debe probar una necesidad obligatoria, como es la inversión para restablecimiento de su salud o gastos de su manutención, en el evento de que no existan recurso para solventar estas necesidades podrá solicitar al Juez competente la venta de los bienes inmuebles de propiedad del incapaz.

De las declaraciones recepcionadas, observa el Despacho que son claras al precisar que **MÓNICA ACERO ORTIZ** no recibe mesada pensional y que las únicas personas que se preocupan por su salud y solventa sus necesidades es su guardadora son sus Guardadoras **ANA MERCEDES ORTIZ VALENZUELA**, junto con su familia extensa, quienes asumen la obligación de su manutención como es el alimento, gastos de salud y vivienda.

En conclusión se observa que de la documentación aportada y las declaraciones recibidas se establece por parte del Juzgado que es beneficioso para **MÓNICA ACERO ORTIZ** enajenar los derechos Herenciales que tiene en la sucesión de su padre, y que con el dinero obtenido se va a obtener una vivienda para la menor, para lo cual el despacho determinara un lapso de tiempo para la venta de esos derechos Herenciales por cuanto por vía jurisprudencial y doctrinal, así se ha señalado teniendo en cuenta los trámites que deben surtirse para efectos de adelantar la venta cuyas actuaciones muchas veces no depende de los Guardadores.

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional ha precisado que: *“(...) el régimen legal de la incapacidad de ejercicio es la solución general que históricamente el legislador ha adoptado para proteger los derechos de los menores y los demás incapaces en las relaciones jurídicas; de esta manera, el legislador les provee en el representante legal, sea el padre de familia, el tutor o el curador, una persona que supla su inmadurez o sus dificultades cognoscitivas o volitivas cuando actúan obligándose en el mundo jurídico; no obstante, respecto de algunos actos esta protección general no se considera suficiente, por lo cual la ley civil los reviste de exigencias adicionales.*

Tal sucede, entre otros, con los actos jurídicos que implican la disposición o el gravamen de bienes inmuebles del menor o los demás incapaces, respecto de los cuales desde 1887, cuando con la expedición de la Ley 57 de ese año se adoptó el Código Civil, se exige que el representante legal obtenga la previa licencia judicial. En efecto, dentro de una concepción social que especial valía a los bienes raíces, el Código Civil consagra medidas encaminadas a mantener en cabeza de los incapaces esta clase de propiedad, a la cual se vincula una mayor estabilidad económica.

En este sentido, el artículo 303 del mencionado Código, refiriéndose al caso en que el incapaz es un menor de edad y su representante legal es el padre y/o la madre, reza: (...).

Por último, debe recordarse que la autorización judicial exigida para este tipo de actos dispositivos respecto de inmuebles de incapaces fue especialmente definida en sus características y finalidad por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que destacó al respecto que la ley exigía que tal autorización se produjera ‘con conocimiento de causa’, es decir mediando

prueba que acreditara 'la necesidad o utilidad manifiesta de la venta; porque es del contenido de esta prueba (...) de donde legalmente debe deducir el juez la conveniencia o inconveniencia de autorizarla'.

De (...) todo lo anterior la Corte concluye que en la legislación civil una de las formas de desarrollar la necesaria protección de los menores y los demás incapaces es la institución de la incapacidad de ejercicio; institución jurídica que se acompaña de medidas legislativas complementarias destinadas a la protección del patrimonio del incapaz, particularmente de sus bienes inmuebles, medidas que de manera general exigen que cualquier acto dispositivo sobre esta clase de bienes de los incapaces obtenga la previa autorización judicial, y además, cuando tal acto dispositivo se lleva a cabo a título de venta, la misma deba producirse en pública subasta". (C.C. C-716/06).

El artículo 581 del C.G.P., dispone que, en la solicitud para enajenación de bienes de incapaces, deberá justificarse la necesidad y expresarse la destinación del producto, exigencias que tampoco era ajena en vigencia del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, el artículo 93 de la Ley 1306 de 2009, dispone que *"El curador deberá obtener autorización judicial para realizar los siguientes actos, en representación de su pupilo: ... b) Los actos onerosos de carácter conmutativo, de disposición o de enajenación de bienes o derechos de contenido patrimonial, divisiones de comunidades, transacciones y compromisos distintos de los del giro ordinario de los negocios, cuya cuantía supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales."* Subrayado fuera del texto.

Frente al tema, debe recordarse que la autorización judicial exigida para este tipo de actos dispositivos fue especialmente definida en sus características y finalidad por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que destacó al respecto que la ley exigía que tal autorización se produjera *"con conocimiento de causa"*, es decir mediando prueba que acreditara *"la necesidad o utilidad manifiesta de la venta; porque es del contenido de esta prueba ...de donde legalmente debe deducir el juez la conveniencia o inconveniencia de autorizarla"*.

De lo anterior, se logra establecer que, para la venta de bienes o derechos de contenido patrimonial, como en el presente asunto, debe obtenerse autorización judicial y al efecto ha de demostrarse suficientemente la conveniencia de la venta, la utilidad que esta presenta para el propietario y es del cargo del representante demostrar al juez las pruebas pertinentes para dar la suficiente claridad sobre tales aspectos de acuerdo con lo estatuido en el artículo 167 del C.G.P.

La finalidad de la legislación sustancial y procesal es proteger el patrimonio de los menores, es por ello que restringe las facultades que tiene el representante legal cuando se trata de negocios de disposición que recaen sobre bienes inmuebles, y en forma expresa prohíbe a los padres enajenar a título oneroso bienes inmuebles o derechos herenciales, prohibición que no es absoluta pues siempre y cuando se presenten situaciones especiales autoriza dicha venta, autorización que debe concederla el juez.

La Sala de Familia del Honorable Tribunal de Bogotá, en sentencia proferida el diez (10) noviembre de dos mil cinco (2005), M.P. OSCAR JULIO MAESTRE PALMERA, al respecto afirmó: *“...De las normas antes citadas se colige que, en tratándose de bienes de menores de edad, y, en general de incapaces, para gravarlos con hipoteca o enajenarlos es necesario que el representante legal esté autorizado por el Juez, debiendo para ello adelantar el proceso de jurisdicción voluntaria, en el cual debe demostrarse la necesidad y conveniencia de la venta...”*.

Para que la licencia proceda, es menester demostrar la necesidad o utilidad manifiesta de la operación proyectada. Esta puede presentarse con la demanda, si se ha preconstituído, o pedirse en la misma, pues de conformidad con el art. 164 del Código General del Proceso, *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”*.

Por su parte el artículo 167 del Código General de Proceso, nos indica con meridiana claridad: *“Incumbe a las partes el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”*

Así las cosas, el Despacho confiere el permiso para que se efectúe la señalada venta una vez ha alcanzado plena convicción de la necesidad o

conveniencia del negocio. Esta es la función medular del dispensador de justicia en un Estado Social de Derecho en donde, estando al frente de la protección que se debe brindar a quien la necesita no desplaza a quien tiene el deber primario de cumplir. Lo contrario es retornar a la superada concepción paternalista.

En consecuencia, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **CONCEDER** la licencia judicial para para enajenar los derechos herenciales que posee **MÓNICA ACERO ORTIZ** en la sucesión de su difunto padre **RICARDO ACERO VERA** que se tramita actualmente en el Juzgado 24 de Familia de esta ciudad.

SEGUNDO: **AUTORIZAR** a la señora **MERCEDES ORTIZ VALENZUELA** para que en representación legal de su hija **MÓNICA ACERO** enajene los derechos Herenciales que posee en la sucesión de su padre **RICARDO ACERO VERA**

TERCERO: En desarrollo de la anterior autorización se debe dar estricto cumplimiento a la venta de derechos herenciales.

CUARTO: Acredítese al Juzgado el cumplimiento de la autorización, en particular la venta de los derechos herenciales que posee **MÓNICA ACERO ORTIZ** en la sucesión de su difunto padre **RICARDO ACERO VERA** que se tramita actualmente en el Juzgado 24 de Familia de esta ciudad.

QUINTO: Notifíquese ésta providencia al Agente del Ministerio Público.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, followed by three small vertical lines.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ

ESTADO 77 18-11-2020 TOMAS OLAYA GONZALEZ secretario

^[1] Cámara de Representantes de la República de Colombia. *Exposición de motivos Ley 1996 de 2019*. Gaceta 613 de 2017, consultada por última vez el 8 de octubre de 2019. Disponible en línea en:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2017/gaceta_613.pdf